

#### **D.4. LA ACADEMIA**

La violencia que aqueja a México ha ido modificando la actitud de diversos actores. Siempre ha habido académicos interesados en el crimen organizado y en su efecto sobre los derechos humanos. Un cambio verificable es que un número cada vez mayor de instituciones académicas, públicas y privadas, mexicanas y extranjeras, están creando programas de investigación sobre las muchas aristas que tienen la guerra y la paz. Entre ellas se distingue, por cierto, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Si a ello sumamos la aparición de centros de investigación especializados, se entiende el incremento en la calidad del conocimiento sobre estos temas y la exigencia, cada vez mejor fundamentada, de políticas públicas acordes a la gravedad de la situación.

#### **E. LECCIONES DE SAN FERNANDO Y ALLENDE**

La revisión de los acontecimientos de San Fernando y Allende nos permiten presentar algunas conclusiones, líneas de investigación e hipótesis de trabajo que armamos sobre los siguientes supuestos:

- a) El sistema de atención a víctimas del Estado mexicano necesita una reestructuración a profundidad que responda con seriedad al reto planteado por la multiplicación de las víctimas.
- b) Ello exige, entre otros requisitos, mejorar la empatía y los canales de comunicación entre Estado y sociedad.
- c) Con eso regresamos al hilo conductor de esta investigación. Los acercamientos a la verdad son una forma efectiva para generar acuerdos sobre políticas públicas. Cuando mejore la comprensión del fenómeno y de los “otros”, resultará relativamente más sencillo lograr consensos entre víctimas, sociedad y Estado sobre las formas de armonizar los derechos humanos con la seguridad.

Este razonamiento lleva a enumerar algunos huecos que deben cubrirse si queremos entender a cabalidad las lecciones dejadas por San Fernando y Allende.

#### **E.1. LOS ZETAS Y LA SOCIEDAD**

Los trabajos de Primo Levi, Robert Antelme, Christopher Browning y Hanna Arendt se caracterizan por un esfuerzo por entender la lógica de los perpetradores.<sup>25</sup> Cuando entendamos a los violentos y el respaldo que tienen en la sociedad, será posible disminuir el número de víctimas.

Es decir, las personas y los grupos nutren al capital social positivo o al negativo. En los municipios estudiados, había quienes apoyaban el estado de derecho y quienes

compartían las creencias y antivalores del crimen organizado. Lo ejemplificamos con dos historias de Allende.

El control sobre los policías municipales de ese municipio coahuilense no era absoluto. Sabemos, por el expediente, que nueve de los 20 policías no colaboraron activamente y que el cuerpo de bomberos incluso se rehusó a colaborar y a recibir dinero. Reproducimos el testimonio de un bombero sobre la relación que estableció su corporación con los Zetas (**relato no verificado**):

El jefe de plaza “le enseñó una faja de mucho dinero” al comandante de los bomberos de Allende y le dijo “tengan para que se alivianen” y el comandante le contestó que no, que así estaba bien, que “no había bronca”. Entonces los Zetas “se bajaron de sus vehículos y nos dicen: ‘váyanse a la verga para atrás’” y en la parte de atrás nos bajan los pantalones y con un leño nos pegaron en las nalgas, nos tablearon a todos mis compañeros por habernos negado a recibir el dinero. Después de tablearnos se fueron del lugar y advirtieron que si [seguíamos negándonos] nos iría peor. El comandante luego “habló con ellos y convinieron no aceptar nada de ellos para no tener ningún compromiso”.

Desconocemos cuántos habitantes de Allende pusieron distancia con los delincuentes. Sabemos que hubo quienes justificaron los hechos y hasta celebraron las desapariciones.

Un vecino de Allende declaró al Ministerio Público que “en la casa de XXXX Garza, vendían droga, y siempre iba mucha gente a comprar y eso era algo que todo el pueblo sabía”. Otra persona reconoció haber subido a Facebook fotografías de casas derruidas acompañado de una frase inquietante: “todo se paga ... ¿qué tal se siente?”. Según el expediente de la Procuraduría de Coahuila, el comentario de esta persona se debía a que los Garza le habían arrebatado el control de la plaza a su padre.

En otras palabras, ¿cuál es la magnitud de la base social que tenía o tiene el estado de derecho y el crimen organizado en San Fernando, Allende y otras partes del país?, ¿cómo vamos a reaccionar ante aquellos sectores de la población que optaron por entregar su lealtad a los violentos?, ¿tiene la misma responsabilidad el sicario que asesina y los jóvenes que lo protegen porque quieren seguir su camino?

¿Por qué permitieron, el gobierno del estado y la Federación, tantos márgenes de autonomía a los Zetas? Es insuficiente especular sobre sus motivos. Debemos tener certidumbre, lo cual requiere hacer entrevistas, trabajo de campo y diseñar metodologías adecuadas para cada región.

## ***E.2. EL ESTADO***

Para hacer análisis más finos tenemos que desagregar al Estado en sus elementos. Llama, por ejemplo, la atención la aparente autonomía de los presidentes municipales de San

Fernando y de Allende frente a sus respectivos gobernadores y su sometimiento a los Zetas. ¿Cuán generalizado es este control en otros municipios de Tamaulipas, Coahuila y otras entidades mexicanas? En la documentación revisada se insinúan los pasos que tiene la dinámica de la dominación. ¿Existe un protocolo para la emancipación?

Lo mismo podría decirse de la relación de los gobernadores con la Federación. El gobernador de Tamaulipas se desentendió de la masacre de San Fernando y delegó el problema íntegro en la Federación. Rubén Moreira tomó la actitud contraria porque en la conversación que tuvimos con él aseguró que ya en su discurso de toma de posesión anunció: “de la seguridad de Coahuila me encargo yo”. ¿Significa lo anterior que la variable fundamental es la voluntad del gobernador? Sabemos que también influye la presión de una sociedad organizada, pero ignoramos cómo.

En el Ejecutivo federal, ¿cuánto sabían sobre lo que pasaba en San Fernando y en Allende, en Saltillo y en Ciudad Victoria?, ¿estaban enterados, pero lo consideraban daños colaterales que la sociedad debía pagar como parte de la estrategia de fragmentar a los cárteles?

A lo que vamos es que **no todos los funcionarios son iguales** y que, por lo tanto, es posible que la sociedad y sus partes establezcan acuerdos con funcionarios con mayor sensibilidad. Sin embargo, ese entendimiento tiene como requisito previo que las diferentes partes del Estado dejen de negar el costo humano que está teniendo la violencia criminal. Hay millones de víctimas esperando ser atendidas.

### ***E.3. LA VARIABLE INTERNACIONAL***

Falta dedicarle mucha más atención al papel jugado por otros países, en particular Estados Unidos. Los 72 migrantes buscaban ingresar a Estados Unidos y al menos dos de los causantes del ataque a Allende son actualmente testigos protegidos de la DEA, que se rehúsa a compartir información con el gobierno de Coahuila, pese a la orden de aprehensión en Coahuila contra ellos. Estaría luego el salvadoreño que, según el entonces presidente de El Salvador, sobrevivió a la matanza y se encuentra en Estados Unidos, al parecer como testigo protegido.<sup>26</sup> Si agregamos otros factores, pensamos que, como hipótesis de trabajo, San Fernando y Allende deberían ser analizados como expresiones de una violencia binacional y regional. Que algunos criminales tengan doble nacionalidad refuerza la idea de que estamos ante una violencia internacionalizada.

### ***E.4. LA VARIABLE ECONÓMICA***

Estaría, finalmente, el peso de lo económico tras las acciones de los Zetas. ¿Tiene algún significado que las zonas donde se dieron las dos matanzas sean ricas en gas y/o petróleo? Éste es uno de los argumentos de la profesora de la Universidad de Texas

Guadalupe Correa-Cabrera, quien nos facilitó, en las etapas finales de elaboración de este informe, su obra en prensa.<sup>27</sup>

\*\*\*\*\*

Éstas son algunas de las reflexiones y preguntas que nos deja el estudio de dos tragedias en municipios cercanos a la frontera norte. ¿Qué hacer?

En los Anexos ya incluimos algunas ideas sobre lo que podrían hacer la CNDH y la CEAV. Sin embargo, dada la magnitud que tiene la tragedia humanitaria, la CNDH, la CEAV y el INAI deberían explorar un entendimiento. Entre los acuerdos que podrían tomarse estaría el seleccionar una docena de casos paradigmáticos para revisarlos a profundidad como insumos de un modelo mexicano de atención a las víctimas de la violencia.

De manera paralela, los organismos civiles, los medios de comunicación y los académicos interesados en las víctimas deben explorar agendas comunes orientadas a diseñar estrategias conjuntas para tener mejores políticas públicas.

El Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México termina agradeciendo a la CEAV, la CNDH y el gobierno de Coahuila, entre otras instituciones, su disposición a colaborar en una investigación académica independiente sobre dos tragedias mexicanas.

Desde nuestra perspectiva, el modelo de acercamientos a la verdad por medio de acuerdos entre Estado e institución académica es fructífero y puede contribuir a una mejor interpretación de la violencia y la paz. El Estado y la sociedad están obligados a unirse tras un objetivo marcado claramente en el Artículo 1 de la Constitución: “el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. Y la sociedad debe exigirselo.